

CONTAMINACIÓN VISUAL DESMEDIDA POR CARENCIA NORMATIVA EN COLOMBIA: UN ESTUDIO SOBRE LA INAPLICACIÓN DE LA LEY 140 DE 1994.

ARTÍCULO DE REVISIÓN

**LEYDY YANETH MORENO BUSTAMANTE
CÓDIGO: 2106723**

**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA
FACULTAD DE DERECHO
PREGRADO
BOGOTÁ D.C.
2017**



Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:

Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

Para leer el texto completo de la licencia, visita:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/co/>

Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra

hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:



Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

CONTAMINACIÓN VISUAL DESMEDIDA POR CARENCIA NORMATIVA EN COLOMBIA: UN ESTUDIO SOBRE LA INAPLICACIÓN DE LA LEY 140 DE 1994.

Leydy Yaneth Moreno Bustamante

Egresada Universidad Católica de Colombia (2016)

*Actualmente laboro en PROASCOL S.A ASEGURADOS COLOMBIANOS
en el cargo de analista jurídica.*

RESUMEN

En el presente artículo se realizará una revisión bibliográfica relacionada con el marco normativo de la Ley 140 de 1994 que regula la publicidad exterior visual en el territorio nacional, con el fin de que el lector aprecie que a pesar de su expedición y la posterior promulgación de decretos, relacionados con la misma materia, no está siendo cumplida a cabalidad; denotando así, que requiere de ajustes que aumenten sus exigencias para lograr la preservación del medio ambiente, puesto que no está diseñada para cobijar toda la problemática actual, situación que resulta alarmante teniendo en cuenta que la sociedad ha ido evolucionando y generando los medios e instrumentos para evitar los perjuicios al entorno y a sus habitantes.

Palabras Claves: Medio ambiente, contaminación visual, derechos humanos, Constitución Política de Colombia, Ley 140 de 1994, políticas públicas, daño ambiental, alteración del entorno.

ABSTRACT

In the present article a bibliographic review was carried out related to the legal framework of the Law 140 of 1994 that regulates the external visual publicity in the national territory, in order that the reader appreciates that a weight of its expedition and the subsequent promulgation of Decrees, related to the same matter, is not fulfilled a fullness; Denoting this, which requires the adjustments that increase the requirements to achieve conservation of the environment, which is not designed to cover all the current problems, the situation that is alarming taking into account that society has been evolving and generating the means and The instruments To avoid damages to the environment and its inhabitants.

Keywords: Environment, visual pollution, human rights, Political Constitution of Colombia, Law 140 of 1994, public policies, environmental damage, alteration of the environment.

TABLA DE CONTENIDO

Resumen.....	
Abstract	
Introducción	
 1. La contaminación.....	
1.1. ¿Qué es la contaminación?.....	
1.2. Consecuencias de la contaminación visual.....	
1.3 Causas de la contaminación visual.....	
1.4 Contexto histórico de la Ley ambiental relacionada con publicidad exterior.....	
 2. Ley 140 de 1994.....	
2.1. Nociones Generales	
2.2. Análisis crítico de la Ley.....	
2.3. Medidas para el fortalecimiento de la Ley	
 3. Derecho a un ambiente sano.....	
3.1. Importancia del derecho a un ambiente sano.....	
3.2. Daño ambiental	
3.3. El estado frente a la protección del medio ambiente	
 4. Situación actual en Colombia de la contaminación visual.....	
4.1. El derecho a un ambiente sano en la Constitución Política.....	
4.2. Acción de tutela, popular y de cumplimiento como mecanismo de defensa.....	
4.3. Necesidad de políticas públicas para la preservación del medio ambiente.....	
 Conclusiones	
Bibliografía	

INTRODUCCIÓN

Aproximadamente desde principios del siglo XXI en Colombia es cada vez más evidente la problemática de la contaminación visual ocasionada principalmente por la publicidad exterior, por lo tanto en el siguiente trabajo de revisión se evidenciará que a pesar del contenido en la Constitución Política del derecho colectivo a un ambiente sano, no existe una regulación estricta que exija una preservación en cuanto a la colocación de la publicidad exterior en las calles, lo cual cada vez afecta en mayor proporción al entorno y a sus habitantes, resultando inaceptable si se tiene en cuenta que estamos en una época tecnológica donde la mayoría de las personas tienen acceso a herramientas como la internet y a medios masivos de comunicación, siendo un medio eficaz para publicar ofertas, eventos, productos, entre otros; los cuales son las causas principales de la contaminación generada por la publicidad en el entorno, ya que como consecuencia de ello surgen espacios permanentes y otros improvisados en su mayoría inestables, destinados a la proliferación de esta forma de publicidad con una constante expansión generando un fuerte monopolio empresarial de gran remuneración financiera que actúa en el subconsciente del ciudadano, sin limitaciones.

El objeto principal a desarrollar es analizar en primer lugar el contenido de la Ley 140 de 1994 que regula la publicidad exterior visual, además los decretos y normas expedidos después de la promulgación de dicha ley como un intento para complementar sus exigencias, demostrando así el vacío normativo que existe en la reglamentación de todo lo relacionado con la contaminación visual, iniciando por los elementos que la misma considera publicidad visual y los que no fueron incluidos, ya que a pesar de lo mencionado anteriormente las cifras reflejan el incremento de la problemática.

Posteriormente se exaltará la necesidad de que el legislador intervenga en el sentido de fortalecer la norma para su aplicación a nivel nacional con el fin de generar una protección eficaz del medio, ello para resolver el problema jurídico respecto de si ¿Es una solución efectiva la promulgación de una nueva norma que prohíba o regule la publicidad exterior visual?

Con el fin de desarrollar el cuestionamiento realizado, mediante la bibliografía consultada se expondrán los perjuicios ocasionados por la contaminación visual al medio ambiente la cual además afecta la salud de los seres humanos.

Seguidamente en el artículo se explicará la definición de la contaminación en su aspecto general, el significado de la contaminación visual, consecuencias y causas de la misma, el contexto histórico de la norma sobre la cual se aborda la presente revisión desde el inicio de su promulgación hasta la actualidad y la descripción de su contenido;

un análisis crítico de la ley y las medidas que pueden usarse como mecanismos para el fortalecimiento de las exigencias contenidas en ella con el fin de que prevalezca el cuidado al medio ambiente. Se expondrá la importancia del derecho a un ambiente sano, la definición del daño ambiental, el papel que debe desempeñar el estado respecto a la protección del entorno; seguidamente se realizará un énfasis en el derecho al ambiente sano plasmado en la Constitución Política de Colombia de 1991, se mencionarán las acciones legales que pueden ser ejercidas para que prevalezca el derecho que tienen los ciudadanos a un ambiente sano tales como la acción de tutela, acción popular y acción de cumplimiento, reflejando la necesidad de implementación de políticas públicas para la preservación de los recursos naturales y las autoridades ambientales que existen en nuestro país.

Se presentará un análisis sobre la carencia en la legislación colombiana para regular eficaz y estrictamente el tema de revisión debido a que la normatividad actual se ocupó únicamente de la publicidad exterior visual omitiendo en absoluto los otros elementos publicitarios que afectan la problemática, además de ello al realizar un análisis exhaustivo se evidencia que su contenido no está siendo cumplido con la rigurosidad necesaria, denotando la falta de supervisión de las autoridades ambientales competentes, no obstante y con base en lo expuesto sobre la posterior promulgación de las normas relacionadas con el tema, se demuestra la necesidad de una ley que sea de aplicación nacional y no solo departamental o municipal para una minoría, ya que como se podrá apreciar por ejemplo en la ciudad de Bogotá se expiden acuerdos de aplicación interno para minimizar los efectos generados, lo cual debería ser una labor del congreso para la expedición de una norma que cubra toda la problemática en cada rincón del país.

Como corolario de lo expuesto y con base en la revisión realizada se enfatizará en la necesidad de una reestructuración de la norma teniendo en cuenta el estado actual de la misma, los enfoques en los que se debe centrar para lograr una ley con mayor exigencia la cual en el momento de su aplicación ayude a disminuir la problemática y el papel que debe desempeñar el estado con el fin de cumplir todos los presupuestos analizados en el país.

1. LA CONTAMINACIÓN

1.1 ¿Que es la contaminación?

Este concepto se puede definir como la introducción de un elemento nocivo al medio ambiente que ocasiona perjuicios al mismo, en ocasiones este es líquido, sólido, gaseoso o una mezcla de estos, cabe resaltar que en el estado en que se presente siempre alterará desfavorablemente el estado natural del entorno.

Técnicamente se entiende como la introducción de agentes biológicos, químicos o físicos a un medio que no pertenecen, lo cual genera una alteración y modificación de la composición natural del medio ambiente lo cual puede tener efectos adversos para la salud y el equilibrio ecológico a corto o largo plazo, a las sustancias o materias que causan dichos efectos se les denomina contaminantes tóxicos. (Peña, Palacios & Ospina, 2005, p. 51)

De otro lado la contaminación visual hace referencia al cambio o desequilibrio en el paisaje ya sea natural o artificial el cual afecta las condiciones de vida y las funciones vitales de los seres, distorsionando la observación del paisaje; dicha contaminación parte de todo aquello que afecte o perturbe la visualización de algún sitio, zona o paisaje, cargando el espacio visual y superando la capacidad de absorción de datos que tiene el cerebro humano, con mensajes publicitarios comerciales u otros elementos que generan una sobreestimulación en las personas afectando la salud de las mismas o de la zona donde se produzca el impacto ambiental. (Acosta, 2008, p. 86)

Resulta importante resaltar que la contaminación visual es una de las mayores problemáticas que atraviesa el mundo, puesto que el entorno está rodeado de publicidad y elementos que afectan el estado natural del medio; en el caso de los elementos como afiches el inconveniente es aún mayor puesto que la gran mayoría no recibe un mantenimiento lo cual genera posteriormente contaminación en el suelo.

1.2 Consecuencias de la contaminación visual

Las consecuencias son diversas, según el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de España (SEPPRONA) puede provocar dolor de cabeza, estrés por saturación de colores y elementos, distracciones a los conductores cuando desvían la atención al observar un cartel en la carretera o sustracción de datos de interés al ocultar una señal de tránsito o de tipo informativo. (Acosta, 2008, p. 87)

Debido a que este tipo de contaminación es percibido por la vista causa estímulos agresivos creando una sobre estimulación y ansiedad en las personas, los avisos publicitarios luminosos no contienen filtro, afecta la salud generando estrés, dolor de cabeza y accidentes de tránsito por distracciones y hasta la muerte de algunas especies como las aves que se estrellan con anuncios; por otra parte debido al abuso de ciertos elementos como los anuncios que alteran la estética de los paisajes rurales y urbanos ocasionan efectos negativos en el equilibrio psicológico donde se trata de manipular las decisiones de los sujetos. (Aguilar, Benítez & Tafolla, 2006, p. 407)

Un ejemplo de ello es el periodo de elecciones donde un promedio de diez partidos políticos utilizan el dinero del pueblo para su publicidad en cada espacio posible intentando obtener un voto con publicidad y no con argumentos, propuestas y hechos, es importante tener en cuenta que además en ocasiones los fuertes vientos derriban los anuncios causando daños materiales e incluso la muerte de tal forma que la contaminación visual no solo atenta contra la belleza del espacio sino que puede provocar una cadena de perjuicios de mayores. (Aguilar, Benítez & Tafolla, 2006, p. 408)

Es evidente como la publicidad es el perjuicio más notorio por su impacto inmediato, debido a la sobreestimulación en el ser humano mediante la información indiscriminada y sus múltiples mensajes, como se mencionó el hombre percibe un ambiente caótico y de confusión que lo excita y estimula, provocándole afectaciones a la salud, por ejemplo, en los conductores, puede llegar a generar accidentes de tránsito.

Por otro lado se ven altamente afectadas las estructuras de los lugares por la superposición de carteles, el espacio público invadido por publicidad, lo que hace que dicho panorama sea agresivo para el hombre; se puede concluir con ello que una ciudad con contaminación visual es muestra de un estado con falta de política para la misma, con una regulación deficiente o inexistente, convirtiendo a los entornos en escenarios de decisiones despreocupadas por su hábitat, que conviven formando un caos difícil de asimilar por el ojo humano.

1.3 Causas de la contaminación visual

Cabe resaltar que las ciudades transformaron el paisaje natural en asfalto y cemento, posteriormente las grandes empresas y los publicistas se encargaron de contaminarlo con sus “emisiones mentales”. Los causantes de este tipo de contaminación son muy variados en las ciudades y en el campo y no sólo en la superficie sino también en espacios subterráneos como parqueaderos y metros, publicidad en forma de letreros, anuncios, pantallas de televisión y proyectores multimedia, vallas publicitarias, cableados, instalaciones y tendidos eléctricos enmarañados, parabólicas y antenas de televisión, aire acondicionado, edificios deteriorados o diseñados incorrectamente, tratamiento de pavimentos, materiales para edificación inadecuados, agrupaciones de basuras, puestos de vendedores ambulantes, etc. (Acosta, 2008, p. 87)

A pesar de que hay diversas causas que son provocadas por este tipo de contaminación la más destacada es el elevado número de avisos informativos y publicitarios puestos en la calle, debido a que una imagen que sobrepasa la información que el cerebro

puede asimilar produce estrés y ansiedad haciendo que la percepción del entorno sea cada vez más confusa y observar el paisaje sea una acción casi imposible.

1.4 Contexto histórico de la Ley ambiental relacionada con publicidad exterior

En Colombia la Ley 140 de 1994 es la norma que reglamenta la publicidad exterior visual en el territorio nacional, desde entonces han sido expedidos los siguientes Acuerdos y Decretos con el fin de complementar la misma, de los cuales a continuación, se realizará una breve descripción de su contenido:

Decreto 959, establece cuales son los elementos de amoblamiento urbano, las zonas donde está prohibido colocar publicidad exterior visual, especifica además la definición de aviso, vallas, pendones y carteleros junto a las características que deben reunir los mismos, el lugar donde no podrán instalarse y otras formas de publicidad exterior visual. (Decreto 959, 2000)

Decreto 505, “suspende el registro de elementos de publicidad exterior visual tipo valla en el Distrito Capital de Bogotá, durante el período de la declaratoria de estado de prevención o de alerta amarilla” (Decreto 505, 2003).

Decreto 506, plantea las reglas de las prohibiciones para la instalación de publicidad exterior visual contenidas en el Decreto Distrital 959 de 2000, define los elementos que no se consideran avisos, vallas, pendones y sus medidas, condiciones de instalación y otras normas de publicidad exterior. (Decreto 506, 2003)

Acuerdo 79, en el cual se plantean los comportamientos relacionados con la publicidad exterior visual y manifiesta que el Gobierno Distrital estimulará y fomentará programas de limpieza y descontaminación visual respetando la normatividad vigente, mediante la creación de concursos a "la mejor fachada" y al "mejor sector comercial", entre otros, que induzcan a propuestas novedosas de mejoramiento del paisaje urbano. (Acuerdo 79, 2003)

Ley 1801, Artículo 180. *Multas*. Es la imposición del pago de una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento realizado, según la cual varía el monto de la multa. Así mismo, la desobediencia, resistencia, desacato, o reiteración del comportamiento contrario a la convivencia, incrementará el valor de la multa, sin perjuicio de los intereses causados y el costo del cobro coactivo. (Ley 1801, 2016)

Contaminación visual: multa por un valor de uno y medio (1/2) a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes, atendiendo a la gravedad de la falta y al número de metros cuadrados ocupados indebidamente (Ley 1801, 2016).

Respecto de las normas expedidas con posterioridad a la Ley 140 de 1994, es importante resaltar lo que han establecido las siguientes jurisprudencias de la publicidad exterior visual, donde la **Sentencia C-535/96** plantea que:

La publicidad exterior visual hace parte de la noción de "patrimonio ecológico" local, por lo cual se está frente a una competencia propia de los concejos municipales y distritales, así como de los organismos de los territorios indígenas, la cual les es asignada en función del interés territorial subyacente, pues los problemas de modificación del paisaje que le están asociados abarcan primariamente un ámbito local, por lo cual su regulación corresponde también, en principio, a las autoridades municipales y de los territorios indígenas. Sin embargo, eso no significa que la ley no pueda establecer una normatividad básica nacional en este campo pues, se trata de competencias concurrentes. Lo que no puede el Legislador es vaciar la competencia constitucional propia de los concejos y las autoridades indígenas de dictar normas para proteger, conforme a sus criterios, normas sobre la protección del patrimonio ecológico local. (Corte Constitucional, 1996)

El fallo 379 de 2012, hace referencia a la Ley 140 de 1994:

Asimismo, el que exista una ley nacional que regule la publicidad exterior visual no es óbice para que los concejos municipales expidan las regulaciones que, de acuerdo con sus necesidades locales, sean requeridas a fin de contrarrestar la contaminación visual, que en ocasiones, puede generar ese tipo de publicidad. De este modo, se trata de competencias concurrentes, según se ha determinado legal y jurisprudencialmente (...). En este contexto, reconociendo que la publicidad exterior visual encaja normativamente dentro de la preservación del patrimonio ecológico local, y que la Ley 140 de 1994 constituye solamente la legislación básica mínima sobre la materia, es evidente que corresponde su regulación y desarrollo a las autoridades de los entes territoriales Ley 140 de 1994. (Consejo de Estado, 2012)

2. LEY 140 DE 1994

2.1. Nociones Generales

Respecto al tema de revisión se hace necesario extraer la información principal de la Ley 140:

Reglamenta la contaminación visual en Colombia resaltando que se entiende por publicidad exterior visual el medio masivo de comunicación destinado a informar o llamar la atención del público a través de elementos visuales como leyendas, inscripciones, fotografías y demás documentaciones visibles en las vías de uso o dominio público. (Ley 140, 1994)

Es importante tener en cuenta la mención que hace acerca de lo que no considera publicidad exterior visual siendo la señalización vial, la nomenclatura urbana o rural, información sobre sitios históricos, turísticos y culturales de manera temporal y educativa, cultural o deportivo siempre y cuando no ocupen más del 30% del tamaño del respectivo mensaje o aviso, tampoco considera publicidad exterior las expresiones artísticas como las pinturas o murales que no contengan mensajes comerciales o de otra naturaleza. (Ley 140, 1994)

La ley es clara en cuanto al lugar de prohibición de la publicidad visual siendo estas las áreas del espacio público conforme a las normas municipales, distritales y de las entidades territoriales indígenas, dentro de los 200 mt de distancia de monumentos nacionales, en zonas de prohibición y propiedad privada sin el consentimiento del propietario, sobre infraestructura como postes de red eléctrica y telefónica, puentes y estructuras de propiedad del estado, manifiesta que se podrá poner en los recintos de espectáculos públicos, en los paraderos de los vehículos y demás elementos de amoblamiento urbano. (Ley 140, 1994)

Plantea condiciones para la colocación en el área urbana de los municipios, distritos y territorios indígenas las cuales evidentemente no se cumplen a cabalidad en el país, dichas condiciones plantean que puede instalarse dos vallas contiguas con una distancia mínima que no puede ser inferior A 80 mt, aduce que dentro de los 2 kilómetros de carretera siguiente al límite urbano y territorios indígenas podrá ponerse una valla cada 200 mt y después de ese kilometraje una cada 250 mt; en zonas rurales deben estar mínimo a 15 Mts del borde de la calzada y en terrazas, cubiertas y culatas de inmuebles construidos siempre y cuando su tamaño no supere los costados laterales de dichos inmuebles, en lotes sin construir no podrá ser superior a 48 Mts². (Ley 140, 1994)

Manifiesta que la publicidad no puede obstaculizar la instalación, mantenimiento y operación de los servicios públicos domiciliarios, es permitida además en las zonas rurales siempre y cuando se quiera advertir sobre la proximidad a un lugar o establecimiento siempre y cuando estén ubicados en el lado derecho de la vía según el sentido de circulación del tránsito en dos lugares diferentes dentro del kilómetro anterior al establecimiento con un tamaño máximo de 4Mts² y no podrá ubicarse en una distancia inferior a los 15 Mts contados desde el borde de la calzada más cercana al aviso. (Ley 140, 1994)

Un aparte importante de dicha ley es la referencia que hace al mantenimiento de la publicidad indicando que la misma debe tener un adecuado manejo de tal manera que no presente condiciones de suciedad, inseguridad o deterioro, por lo que los alcaldes deben revisar periódicamente que toda la publicidad cumpla dicha obligación, situación que ciertamente en Colombia no se realiza. (Ley 140, 1994)

2.2. Análisis crítico de la Ley

En la ley se evidencia la falta de directrices sobre políticas públicas en materias de publicidad exterior visual a nivel nacional, en cuanto a la regulación del patrimonio ecológico y cultural, uno de los objetivos de la Ley es la protección del espacio público y de la protección e integridad del medio ambiente existiendo una ausencia en cuanto al cumplimiento de las normas de protección al medio ambiente y de los recursos naturales renovables. (Herrera, et. al., 2008, p. 208)

Además, es notoria la falta de claridad sobre lo que debe entenderse como contaminación visual, lo cual ha generado diversas acciones populares ante la jurisdicción ordinaria y contencioso administrativa con el fin de que prevalezcan los derechos colectivos respecto al derecho al medio ambiente sano y el goce del espacio público. (Herrera, et. al., 2008, p. 208)

Por otra parte la ley se ocupó de regular únicamente la publicidad exterior visual omitiendo en absoluto los otros elementos publicitarios, por lo que al realizarse un análisis se encuentra que la misma es incompleta al no ocuparse de otros elementos y por su parte refleja un interés en las vallas, además de presentarse el cuestionamiento acerca de que ley regula en Colombia la publicidad exterior con una dimensión inferior a 8 Mts² y por qué no se regularon los elementos publicitarios distintos a las vallas como avisos, pendones y carteleros o si por el contrario dichos elementos no forman parte del contenido de la regulación nacional sobre publicidad exterior visual. (Herrera, et. al., 2008, p. 208 - 209)

La ley en sí misma no está expedida para cobijar la problemática que se presenta actualmente en Colombia puesto que no está estructurada con el fin de minimizar las causas que generan principalmente la contaminación visual como es el caso del mantenimiento y cuidado a la publicidad estampada en postes, calles y muros, ya que con el paso de los días generan basura y deterioro al lugar donde se encuentran instalados, en algunos casos, se puede evidenciar que nueva publicidad es puesta encima de otra.

2.3. Medidas para el fortalecimiento de la Ley

Teniendo en cuenta las críticas realizadas a la Ley se evidencia lo importante que es que dicha norma sea modificada ajustándola a la problemática actual y a su vez ampliar sus exigencias para así disminuir la contaminación visual que cada vez se hace más incontrolable en el país, es por ello que se debe implementar en la misma principios de política ambiental que son directrices las cuales sirven como pautas generales de valoración jurídica orientando la interpretación de las normas existentes las cuales son: (Cafferatta, 2003, p. 36)

Principio de congruencia: dicho principio guarda similitud con el principio de regulación jurídica integral el cual exige del legislador una perspectiva macroscópica e integradora el cual ha sido declarado en el Primer Programa de Acción Comunitaria en materia de ambiente y en la recomendación No. 70 del plan de acción adoptado en la conferencia de Estocolmo. (Cafferatta, 2003, p. 36)

Principio de progresividad: responde a ideas de temporalidad, de involucramiento paulatino, de concienciar y adaptación, de dicho principio se deriva la proporcionalidad que significa los cambios impuestos por la norma, el equilibrio de los medios y los fines, la equidad en cuanto al cumplimiento de las exigencias y la gradualidad en cuanto a la implementación de las medidas de control, contención y prevención del daño ambiental. (Cafferatta, 2003, p. 36)

Principio de equidad intergeneracional: este principio indica que el hombre tiene derecho a disfrutar las condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar con la obligación de proteger y mejorar el entorno. (Cafferatta, 2003, p. 37)

Principio de sustentabilidad: es la unión entre el medio y el desarrollo en busca de un nuevo modo de desarrollo basado en una sana utilización de los recursos para la satisfacción de las necesidades actuales y futuras, la misma es requerida en el área ecológica en cuanto a mantener la diversidad biológica y su capacidad de regeneración, el área social con una igualdad de oportunidades para la sociedad, el área cultural preservando la identidad cultural básica en cuanto a la relación del hombre y su medio y el área económica y eficiencia. (Cafferatta, 2003, p.38)

Principio de responsabilidad: Indica que quien genere el riesgo al ambiente es el que lo debe resarcir, sienta las bases para desarrollar un sistema de legislación nacional de responsabilidad y de indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales, es por ello que los estados deben cooperar para la elaboración de leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnizaciones por los efectos adversos de los daños ambientales causados por actividades realizadas dentro de su jurisdicción. (Cafferatta, 2003, p. 39)

Principio de solidaridad: “Aduce que los estados deben cooperar para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la tierra, existiendo una igualdad entre los estados el principio de patrimonio universal” (Cafferatta, 2003, p. 40).

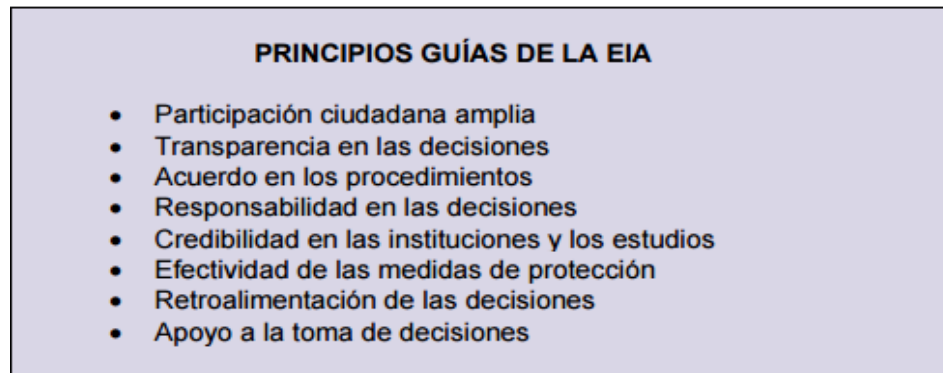
Principio de cooperación: Hace referencia a que los estados deben apoyarse para erradicar la pobreza como requisito del desarrollo sostenible para proteger el ecosistema y lograr un desarrollo sostenible (Cafferatta, 2003, p. 41).

Principio de prevención: “Tiende a impedir la realización de posibles daños y en caso de ser generado que cese a la brevedad posible y que se restablezcan las condiciones anteriores a la ocurrencia” (Cafferatta, 2003, p. 41).

Teniendo en cuenta el daño ambiental que se puede ocasionar, resulta necesario realizar una evaluación de impacto ambiental el cual es un instrumento de planificación y gestión medioambiental con el objetivo de prevenir los daños al medio ambiente mediante la previsión a priori que se aplica en muchos países por gobiernos centrales y locales, organismos internacionales y que además está en constante ampliación, respecto a donde se aplica y al tipo de aplicación de políticas, programas y planes de desarrollo. (Pardo, 2002, p. 27)

Una de las principales características del estudio de impacto ambiental al ser comparada con otras herramientas de gestión ambiental es su carácter preventivo, puesto que su propósito es predecir los posibles impactos ambientales y proveer así la información necesaria para la toma de decisión (Espinoza, 2007, p. 34), lo cual puede ser de gran ayuda para el poder legislativo en el momento de expedir una norma ambiental o en el caso que nos concierne de fortalecer la Ley 140 de 1994.

La naturaleza del estudio proporciona un medio para asegurar que los proyectos se rectifiquen según los niveles de desempeño ambiental, es por ello que un estudio de impacto ambiental puede generar cambios ambientales irreversibles, efectos adversos en ecosistemas, paisajes y otros aspectos ambientales, provee una oportunidad para un mejoramiento ambiental o social. (Espinoza, 2007, p. 35)



(Imagen extraída de Espinoza, 2007, p. 35)

Una posible solución es que en Colombia se establezcan parámetros que prohíban las mencionadas prácticas o en su defecto entablar mecanismos de defensa y que a su vez el legislador analice la situación de la cual los principales afectados terminan siendo las personas que con las consecuencias generadas por la contaminación no pueden subsistir.

Por lo tanto, se hace necesario acabar con todo lo que pone en riesgo el medio ambiente, con un sistema que integre la protección ambiental con el desarrollo económico, esto se logra con la planeación de proyectos que realicen un control sobre el nivel de contaminación, ante esto, crear mecanismos que prevengan las consecuencias perjudiciales.

3. DERECHO A UN AMBIENTE SANO

3.1. Importancia del derecho a un ambiente sano

El derecho a gozar de un ambiente sano consagrado en el Artículo 79 de la Constitución Política de Colombia es clasificado como un derecho colectivo y forma parte de los llamados derechos de tercera generación los cuales son otorgados a toda la comunidad, dicho derecho es considerado como un derecho humano básico y como un pre-requisito y fundamento para el ejercicio de otros derechos humanos, económicos y políticos. (Amaya, p. 18)

La protección y mejoramiento del medio ambiente es un tema de gran importancia debido a que afecta al bienestar de las personas y al desarrollo económico a lo largo del mundo, debido a que el ser humano tiene el derecho fundamental a la igualdad, la libertad, y condiciones adecuadas de vida en un ambiente de calidad que le permita una vida con dignidad y bienestar, así mismo tiene la solemne responsabilidad de proteger y mejorar el ambiente para las futuras generaciones. (Flores, p. 30)

Se han realizado grandes progresos en el reconocimiento de la importancia que tiene un ambiente sano para el desarrollo y la salud de las personas, es por ello que la tematica ambiental ha venido ganando grandes espacios tanto en la legislación internacional como en programas de acción y estrategias de desarrollo sostenible diseñadas desde el foro de las Naciones Unidas y en organismos de cooperación multilateral. (Flores, p. 30)

Es pertinente resaltar la importancia del derecho a un ambiente sano consagrado en la Constitución política el cual es inalienable, pretende establecer una igualdad y es inherente al ser humano, es por ello que es de vital importancia ya que es esencial, teniendo en cuenta que dependiendo de las condiciones que éste le ofrezca, le permitirá desarrollarse económica y socialmente a los pueblos, garantizándoles su supervivencia.

3.2. Daño ambiental

No es un daño común por su compleja comprobación, puesto que en muchas circunstancias es despersonalizado o anónimo, dicho daño puede alcanzar un elevado número de víctimas, barrios, regiones, siendo grave para el ambiente o alguno de sus componentes (Lloret & Garros, 2007, p. 16).

Es el daño o deterioro que sufre el ambiente, alterando el ecosistema sin una específica referencia a un titular del bien lesionado, siendo la causa del menoscabo de un patrimonio concreto, dando lugar a la apreciación de responsabilidad colectiva ambiental llamada por algunos daños ecológicos, por lo que posteriormente debe ser aplicado el principio que establece la obligación de reparar los perjuicios causados al ambiente llamado “quien contamina paga”. Es por ello que ante el deterioro o daño ambiental debe destacarse que el ambiente es un bien jurídico autónomo tutelado por el ordenamiento jurídico. (Lloret & Garros, 2007, p. 13)

Se genera a partir de la contaminación lo que implica la incorporación a los cuerpos receptores, de sustancias que alteran desfavorablemente las condiciones naturales de los mismos de las que se derivan otros tipos de daños de los cuales permanece el daño ambiental que lesionan el bienestar público generando consecuencias a la calidad de vida. (Lloret & Garros, 2007, p. 14)

Los daños ocasionados al ambiente, en muchas ocasiones, no son consecuencia de una sola acción, por el contrario, son el producto de todo un proceso en el tiempo, que sin importar las consecuencias pone en peligro algún elemento del ambiente, rompiéndose con ello el equilibrio propio y natural de los ecosistemas; este puede ser producido de manera casual, fortuita o accidental, por parte de la misma naturaleza o del ser humano.

3.3. El estado frente a la protección del medio ambiente

Es claro que el estado tiene el deber de proteger el ambiente, la diversidad biológica, los procesos ecológicos y las áreas de importancia ecológica como parques nacionales y demás áreas protegidas, es por ello que además el estado debe garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, donde el aire, agua, suelos, costas, clima y las especies vivas sean protegidas conforme a la ley, para lo cual se debe contar también con la participación de la sociedad. (Instituto Nacional de Ecología. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2004, p. 123)

El estado protege el medio ambiente, preserva los recursos naturales, a su vez dicta las normas que aseguran la eficacia de los principios de armonía de los ecosistemas y la integración, diversidad, mantenimiento y recuperación de recursos, la preservación y mejora del ambiente y a su vez cumple con el deber de promover la preservación, defensa y mejoramiento del medio ambiente con el fin de que sus habitantes puedan gozar de un entorno sano que preserven y defiendan, por otra parte puede establecerse una estrategia tal de un organismo

especial con poder de policía para la custodia del medio. (Gordillo et al., 2005, p. 8)

Es importante tener en cuenta además que las ramas del poder público desempeñan un papel central en la protección del ambiente implementando fórmulas que permitan la participación activa de la población en la protección ambiental y exigir responsabilidades para quien incumple los mandatos y prohibiciones en el deber del cuidado a los recursos y al medio, siendo una función preventiva. (Lozano, 2009, p. 108)

El control y la preservación de los recursos naturales debe surgir de una aplicación programada de medidas razonables de contenido económico, jurídico y político, puesto que existe una gran población con necesidades básicas insatisfechas, el problema debe tener la justa apreciación que tienda a satisfacerlas al mismo tiempo incorporando la protección ambiental a las decisiones políticas y económicas; no es incompatible la necesidad de desarrollo con la preservación del medio ambiente. El acierto recae en establecer una armonía entre ambas cuestiones mediante normas serias y razonables acordes a la realidad en que serán aplicadas. (Gordillo, et al., 2005, p. 15)

El Presidente podrá atender los hechos que perturben el orden ecológico del país, las asambleas departamentales y los concejos municipales deberán expedir las disposiciones para el buen manejo del patrimonio natural, las personas tienen el derecho y el encargo constitucional de interponer una acción popular para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el espacio, la salubridad pública y el medio ambiente; cabe resaltar finalmente que en Colombia existen numerosos vacíos y contradicciones en cuanto a la legislación ambiental. (Maya, et al., 1994, p. 207)

Todo ser humano tiene derecho a un ambiente sano, es por ello que el estado debe velar por la protección del mismo, como un compromiso hacia el desarrollo sostenible, estableciendo un control sobre las autoridades competentes con el fin de que se cumplan las normatividades relacionadas con su preservación, lo cual se evidencia con la existencia de algunas normas ambientales que evidentemente no están siendo cumplidas a cabalidad, alterando el estado natural de los ecosistemas. Es necesario que el legislador dentro de sus funciones incremente sus esfuerzos en el cuidado del ambiente, puesto que sin este ningún ser humano puede subsistir, lo cual es notorio con la situación de los vacíos y contradicciones que se presentan a nivel de las leyes ambientales.

4. SITUACIÓN ACTUAL EN COLOMBIA DE LA CONTAMINACIÓN VISUAL

4.1. El derecho a un ambiente sano en la Constitución Política

Es importante resaltar que la protección del bien colectivo del ambiente sano se lleve a cabo por la necesidad que existe de neutralizar una amenaza o un daño que atente contra los derechos fundamentales de sujetos particulares; por lo que todo caso relacionado con el medio ambiente debe ser resuelto dentro de los límites de los cuales la garantía constitucional puede ser protegida a través de mecanismos como la acción de tutela. (Cepeda, 1999, p. 331)

La legislación ambiental en Colombia adquirió su máxima expresión en la nueva Constitución Política que es un importante apoyo para el establecimiento de una política ambiental por consagrar el derecho a un ambiente sano Art. 79 y el saneamiento ambiental entre los objetivos fundamentales del estado para el mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos Art. 366. (Maya, et al., 1994, p. 207)

El reconocimiento constitucional del derecho a un ambiente sano en América latina ha resultado en un proceso de “enverdecimiento” de las constituciones, por lo que en las mismas se ha pasado del mandato político para el estado de la conservación y protección del ambiente al reconocimiento del derecho a un ambiente sano como un derecho humano. En Colombia los principios ambientales más importantes pasaron a tener rango constitucional con la Constitución de 1991, puesto que en la misma se plasmaron una cantidad de referencias ambientales que ha sido calificada como una constitución ecológica reconocida para todas las personas en su Artículo 79. (Islam, Martínez, Mgbeoji & Xi, 2001, p. 50)

En el año 2010 la Corte Constitucional Colombiana en la sentencia C-595 indicó un total de 33 disposiciones constitucionales que a su juicio regulan constitucionalmente la relación de la sociedad con la naturaleza dándole al medio ambiente un interés jurídico superior al contexto colombiano entre estos se puede mencionar: (Delgado, 2013)

“La obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación” (Delgado, 2013).

“La atención del saneamiento ambiental como servicio público a cargo del Estado” (Delgado, 2013).

El derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano; la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo; y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro efectivo de estos fines (Delgado, 2013).

La obligación del Estado de planear el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados; y cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas en las zonas fronterizas (Delgado, 2013).

Las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos como el espacio y el ambiente; asimismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos (Delgado, 2013).

El Estado representa el interés social, siendo el encargado de dictar leyes y diseñar políticas ambientales, velando especialmente que las mismas se cumplan a través de las autoridades designadas para ello, a su vez establece los límites de las conductas antisociales, mediante el control ambiental, administrativo y judicial; mejorando la calidad de vida de sus habitantes, siendo un objetivo claro centrar sus funciones en el direccionamiento del bienestar de las poblaciones y a su vez del entorno.

4.2. Acción de tutela, popular y de cumplimiento como mecanismo de defensa

En defensa de los derechos las personas deben ejercer mecanismos contenidos en el ordenamiento jurídico, es por ello que además de contar con una serie de derechos y libertades, cuenta con mecanismos idóneos para la defensa del medio ambiente sano principalmente por medio de la acción de tutela, acción de cumplimiento y acciones populares, cabe mencionar además la declaratoria de estado de emergencia ecológica, derecho de petición, acción contenciosa, responsabilidad civil por daños ambientales, acción penal, acción disciplinaria, sanciones fiscales y acciones de policía. (Bastidas, & Salazar, 2010)

Por su parte la acción de tutela es un mecanismo contenido en el Art 86 de la Constitución Política, siendo por excelencia el medio de defensa de los derechos fundamentales que estén siendo vulnerados a las personas, se caracteriza por contar con términos abreviados para permitir su eficacia, se puede interponer cuando el derecho del medio ambiente se encuentra en una relación estrecha con un derecho fundamental de modo que al vulnerarse el derecho colectivo del

medio ambiente se esté vulnerando el derecho fundamental en concreto. (Bastidas, & Salazar, 2010)

Al violarse un derecho fundamental consagrado, la acción de tutela procede y se hace exigible ante cualquier juez, es de aplicación directa, sus funciones principales son proteger a los ciudadanos y defender el orden constitucional al asegurar que su contenido no sea transgredido por hechos de la administración y de los particulares. (Zuluaga, p. 59)

La acción popular protege los derechos e intereses colectivos, donde una persona perteneciente a un grupo de la comunidad, está legitimada para defender al grupo afectado por hechos comunes con lo cual protege su propio interés y en ciertos casos obtiene un beneficio económico adicional, las razones principales para ejercer esta acción es evitar un daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza y la vulneración sobre los derechos e intereses colectivos y restituir las cosas a su estado anterior, (Personería Municipal de Armenia, 2017) perfectamente un grupo puede hacer uso de esta acción con el fin de evitar los daños ambientales que cada día ocasiona la contaminación ambiental.

Se define la acción de cumplimiento como aquella que procede contra cualquier autoridad o funcionario que se rehúse a acatar una norma legal o un acto administrativo sin perjuicio de las responsabilidades de ley, es así como es otorgado a los particulares la garantía jurisdiccional de poder reaccionar contra la inactividad o la conducta omisiva de los entes estatales, (Ferrero, 2004, p. 460) en este caso la omisión realizada al derecho de gozar de un medio ambiente sano.

Es claro que los ciudadanos deben hacer uso de los mecanismos de defensa contenidos en la Constitución Política en pro del respeto y cumplimiento de los derechos, con el fin de que sea rechazado todo acto que pueda violar el contenido de la carta política generando perjuicios para el normal desarrollo de sus actividades y bienestar del entorno, toda vez que a pesar de que en ocasiones son vulnerados los derechos, las poblaciones no encuentran los medios para interponer una defensa con el fin de que sean restablecidos los mismos.

4.3. Necesidad de políticas públicas para la preservación del medio ambiente

A grandes rasgos se puede indicar que el concepto de políticas públicas apareció por primera vez en los EEUU a finales del siglo XIX dentro del enfoque metodológico propio de la ciencia política y de la administración, surgió de una idea que consistía en sustituir la política por el conocimiento creando una

administración pública acorde a los criterios científicos. (Canales & Pérez, p. 75)

Ciclo de las políticas públicas:

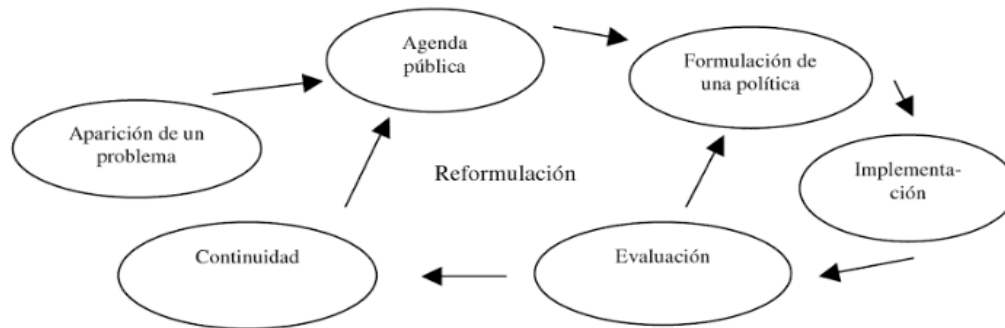


Imagen extraída de Canales & Pérez, p. 83

En Colombia se hace necesario la implementación de políticas públicas especialmente para la regulación de los problemas de la contaminación visual siguiendo los siguientes preceptos:

Identificación y definición de los problemas, enfocándose en cómo altera la situación y cuándo se detecta, se debe delimitar a quienes afecta, en dónde se presenta y las alteraciones que provoca, percepción de una problemática actual o futura, por parte política o técnica resultante de demandas políticas o sociales, necesidades identificables, juicios de valor sobre cierta realidad y compromisos políticos asumidos, seleccionar soluciones, establecer objetivos o metas preliminares, preselección de medios inmediatos (Ruiz, 2002, p. 15 – 16).

La importancia de las políticas públicas depende de su buena ejecución ya que con ello se fortalece la democracia y mejora la gobernabilidad, puesto que su finalidad es generar un bienestar para los ciudadanos, por lo tanto se hace necesario el esfuerzo del estado al diseñarlas, gestionarlas y hacerlas efectivas, ya que se han convertido en una herramienta que incorpora no solo los intereses del Estado, sino también de la sociedad mediante objetivos y acciones concretas para dar respuesta a las problemáticas existentes.

4.4. Autoridades ambientales en Colombia

Las principales funciones de las autoridades ambientales en el país son orientar y regular las normas y aspectos relacionados con el medio ambiente dentro del territorio, encaminada a recuperar, proteger y conservar todos los recursos naturales renovables y del ambiente, para asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las

funciones asignadas a otros sectores, es por ello que uno de sus fines es garantizar el derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente sano.

- **Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT**

Organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nación para asegurar el desarrollo sostenible. (Estrategia Ambiental, 2009)

- **Unidades Ambientales Urbanas**

A través de la Unidades Ambientales Urbanas, los municipios, distritos o áreas metropolitanas donde su población urbana sea igual o superior a un millón de habitantes ejercen las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, dentro del perímetro urbano. Además de las licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponde otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción las autoridades municipales, distritales o metropolitanas tienen la responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación. (Estrategia Ambiental, 2009)

- SDA – Secretaría Distrital de Ambiente – Bogotá
- AMVA – Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Medellín
- DAGMA – Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – Cali
- DAMAB – Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla
- DADMA – Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente de Santa Marta
- EPA – Establecimiento Público Ambiental – Cartagena

- **Corporaciones Autónomas Regionales**

Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la Ley 99 del 22 diciembre de 1993, se encuentran integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del MAVDT. (Estrategia Ambiental, 2009)

- Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM
- Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
- Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER
- Corporación Autónoma Regional del Canal Del Dique – CARDIQUE
- Corporación Autónoma Regional de Sucre – CARSUCRE
- Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS
- Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB
- Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA
- Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE
- Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG
- Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA
- Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS
- Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR
- Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR

- Corporación Autónoma Regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA
- Corporación Autónoma Regional del Guavio – CORPOGUAVIO
- Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO
- Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR
- Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – CORPORINOQUIA
- Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORPOTOLIMA
- Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA
- Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC
- Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ
- Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar – CSB
- Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC
- Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS
- **Corporaciones Autónomas Regionales para el Desarrollo Sostenible**

Además de las funciones propias de las Corporaciones Autónomas Regionales, tienen como encargo principal promover el conocimiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente de la región; ejercer actividades de promoción de investigación científica y transferencia de tecnología; dirigir el proceso de planificación regional de uso del suelo para mitigar o desactivar presiones de explotación inadecuadas del territorio; fomentar la integración de las comunidades tradicionales que habitan la región y de sus métodos ancestrales de aprovechamiento de la naturaleza al proceso de conservación, protección y aprovechamiento sostenible de los recursos, y de propiciar, con la cooperación de entidades nacionales e internacionales, la generación de tecnologías apropiadas para la utilización y conservación de los recursos de la región. (Estrategia Ambiental, 2009)

- Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – CDA

- Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECHOCO
- Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina – CORALINA
- Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena – CORMACARENA
- Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA
- Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Mojana y El San Jorge – CORPOMOJANA
- Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – CORPOURABA
- Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – CORMADGALENA

CONCLUSIONES

En la actualidad en Colombia existe un vacío jurídico respecto de la regulación de la contaminación visual ya que a pesar de la existencia de la Ley 140 de 1994, esta resulta insuficiente en el momento de cobijar la problemática actual, puesto que en sí misma no es clara, y respecto de la protección ambiental se encarga únicamente y a groso modo de las vallas publicitarias dejando a un lado los demás elementos tales como afiches, pancartas, torres de energía, cableado, entre otros; es por ello que es necesario que el legislador fortalezca dicha norma, teniendo en cuenta que la mayor proporción de este tipo de contaminación es la publicidad que encontramos día a día en las paredes de las calles, postes y vallas publicitarias.

La “publicidad” vulnera el derecho al ambiente sano de las personas, el cual se encuentra plasmado en la Constitución Política de Colombia y como se describió, puede ocasionar perjuicios directamente en la salud; es por esto que se debe tener en cuenta que nos encontramos en el siglo XXI y que la mayoría de las personas hoy en día tienen la facilidad de acceder a diversos medios masivos de comunicación, por lo tanto una posible solución sería que la regulación de la ley incluyera la prohibición o la limitación de la publicidad en los espacios públicos y el entorno; y por el contrario fueran promocionados con mayor eficacia en los medios tales como radio, televisión e internet.

En virtud de lo mencionado y respecto del problema jurídico planteado en el artículo de revisión, resulta importante indicar que es imprescindible la elaboración de una ley de

aplicación nacional puesto que algunas ciudades se encargan de expedir acuerdos o normas de aplicación interna, lo cual debería ser una tarea del congreso quien debe promulgar una ley que sea clara y efectiva para minimizar la problemática de la contaminación visual; cabe resaltar que no basta únicamente con la expedición de una norma, por ello es importante además que las autoridades ambientales vigilen y realicen seguimientos al cumplimiento de la misma, que se implementen políticas públicas con el fin de concienciar a los ciudadanos y socializarles la existencia de la legislación para la protección del medio ambiente y así evitar el desconocimiento de la misma.

Además, se hace necesario analizar que la ley que regula actualmente la publicidad exterior no exige en su contenido una preservación ambiental o un compromiso relacionado con el uso limitado de la publicidad; plantea la prohibición de la publicidad visual en áreas del espacio público, dentro de los 200 mt de distancia de monumentos nacionales, en zonas de prohibición y propiedad privada sin el consentimiento del propietario, sobre infraestructura como postes de red eléctrica y telefónica, puentes y estructuras de propiedad del estado, que por el contrario se podrá poner en los recintos de espectáculos públicos, en los paraderos de los vehículos y demás elementos de amoblamiento urbano, lo cual no es tenido en cuenta ya que encontramos publicidad en cada lugar de nuestro país.

No obstante, a pesar de la prohibición y la aceptación en cuanto a la ubicación para la publicidad es visible que las autoridades ambientales encargadas no hacen un seguimiento exhaustivo a las actividades que ponen en peligro el bienestar de los ciudadanos y del entorno por consecuencia de la contaminación visual.

La falta de regulación y seguimiento es aún más evidente si se hace un detalle del aparte de la ley que hace mención al mantenimiento de la publicidad indicando el deber de realizar un adecuado manejo a la publicidad de tal manera que no presente condiciones de suciedad, inseguridad o deterioro, y donde los alcaldes deben revisar periódicamente que toda la publicidad cumpla dicha obligación, es inconcebible que un daño que puede tardar años en repararse o que es permanente, tenga tanto desinterés de la autoridad que se encarga de hacer un seguimiento y dar un estricto cumplimiento a lo poco que se tiene en cuanto a regulación normativa relacionada con la publicidad exterior y que el estado no sea más riguroso en cuanto a sus requisitos o prohibiciones donde prevalezca el interés general y el derecho a un medio ambiente sano.

Por lo tanto, el legislador debe exigir un mayor compromiso por parte de los ciudadanos, teniendo en cuenta el papel fundamental de las autoridades ambientales en el seguimiento del cumplimiento de la norma y el control que deben ejercer como se mencionó, ello es importante debido a que actualmente el mundo se encuentra en una

lucha constante por la preservación del medio y sus recursos; por lo que se hace necesario la creación de un sistema que integre la protección ambiental con el desarrollo económico, creando mecanismos que prevengan las consecuencias perjudiciales y que a su vez permitan la realización de dichas actividades, pero responsabilizando al actor de sus perjuicios y replantearlas de tal manera que no genere afectaciones al entorno o en su defecto llegar a su prohibición, puesto que el estado no debe permitir que se vulnere el derecho de gozar de un medio ambiente sano.

BIBLIOGRAFIA

1. Acosta R. S. (2008). *Saneamiento ambiental e higiene de los alimentos*. Córdoba, Argentina: Ed. Las Brujas.
2. Aguilar, Benítez & Tafolla. (2006). *Problemas sociales, económicos y políticos de México*. México D, F: Ed. Universidad Nacional Autónoma de México.
3. Alcalde Mayor de Bogotá, Distrito Capital (1 de noviembre de 2000) Por el cual se compilan los textos del Acuerdo 01 de 1998 y del Acuerdo 12 de 2000, los cuales reglamentan la publicidad Exterior Visual en el Distrito Capital de Bogotá. (Decreto 959 de 2000)
4. Alcalde Mayor de Bogotá, (30 de diciembre de 2003) Por el cual se declara el estado de Prevención o alerta amarilla por contaminación de elementos de publicidad exterior visual y se suspende el registro de vallas en el Distrito Capital (Decreto 505 de 2003)
5. Alcalde Mayor de Bogotá, (30 de diciembre de 2003) Por el cual se reglamentan los Acuerdos 01 de 1998 y 12 de 2000, compilados en el Decreto 959 de 2000 (Decreto 506, 2003)
6. Amaya N. O. *El desarrollo sostenible y el derecho fundamental a gozar de un ambiente sano*. Colombia: Ed. Universidad Externado de Colombia.
7. Bastidas, L, & Salazar, A. (2010). *La acción popular: herramienta del ministerio público en la defensa del medio ambiente*. Bogotá, Colombia: Pontificia universidad javeriana.
8. Cafferatta N. A. (2003). *Introducción al derecho ambiental*. Buenos Aires: Ed. Semarnat
9. Canales J. M. y Pérez P. L. *Introducción al gobierno y a la gestión local*. España: Ed. Club Universitario.
10. Cepeda M. J. (1999). *Derecho constitucional. Perspectivas críticas*. Bogotá. Colombia: Ed. Siglo del hombre editores.
11. Concejo de Bogotá, (20 de diciembre de 2012) Por el cual se expide el código de policía de Bogotá D.C (Acuerdo 79 de 2003)
12. Congreso de la República, (29 de julio de 2016) Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. (Ley 1801 de 2016)

13. Congreso de la República (23 de junio de 1994) por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el Territorio Nacional (Ley 140 de 1994)
14. Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, (24 de mayo de 2012) Fallo 379 de 2012. (MP Marco Antonio Velilla Moreno)
15. Corte Constitucional, (16 de octubre de 1996) Sentencia C-535/96. (MP Alejandro Martínez Caballero)
16. Delgado C. J. (2013, 18 de marzo). La materia ambiental en la constitución política colombiana. [Web log post]. Recuperado de <http://responsabilidadyderecho.blogspot.com.co/2013/03/la-materia-ambiental-en-la-constitucion.html>
17. Espinoza G. (2007). *Gestión y fundamentos de evaluación de impacto ambiental*. Santiago, Chile: Ed. Banco Interamericano de Desarrollo.
18. Estrategia Ambiental (2009, 12 de mayo). Autoridades ambientales en Colombia [web log post]. Recuperado de <http://blog.estrategiaambiental.com/2009/05/12/autoridades-ambientales-competentes-en-colombia/>
19. Ferrero R. (2004). *Derecho constitucional general. Materiales de enseñanza*. Perú: Ed. Universidad de Lima.
20. Flores T. *Desarrollo sostenible y asamblea constituyente: propuestas*. Bolivia, la Paz: Ed. Fundación Friedrich Ebert- ILDIS, LIDEMA, PRODEMA.
21. Gordillo, Loianno, Flax, Gordo, López y otros (2005). *Derechos humanos*. Buenos Aires: Ed. Fundación de derecho administrativo. 5° edición.
22. Herrera C.H, Londoño T.B, Rodríguez G.A, Barrera O.A, Botero V. R, Casas C.A, Uribe M.A (2008). *Ciudades ambientalmente sostenibles*. Bogotá D, C: Ed. Universidad del Rosario.
23. Instituto Nacional de Ecología. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. *Memorias del segundo encuentro internacional de derecho ambiental*. (2004). México.
24. Islam, Martínez, Mgbeoji y Xi (2001) *Environmental law in developing countries*. Alemania: Ed. The world conservation unión.

25. Lloret J. & Garros M. (2007). *Perspectivas sobre derecho ambiental y de la sustentabilidad*. Argentina, Salta: Ed. Universidad Católica de Salta.
26. Lozano B. (2009). *Derecho ambiental administrativo 10° edición*. Madrid.
27. Maya, Cardona, Umaña, Castañeda, Forero y otros (1994). *Medio ambiente y relaciones internacionales*. Colombia: Ed. Tercer mundo editores.
28. Pardo M. (2002). *La evaluación del impacto ambiental y social para el siglo XXI. Teorías, procesos, metodología*. España: Ed. Fundamentos
29. Peña, Palacios & Ospina. (2005). *Algas como indicadores de contaminación*. Cali, Colombia: Ed. Universidad del Valle.
30. Personería Municipal de Armenia. *Acciones populares*. Recuperado de http://personeriarmenia.gov.co/centro-detalles-nombre-acciones_populares-id-24.htm.
31. Ruiz C. (2002). *Manual para la elaboración de políticas públicas*. México: Ed. Plaza y Valdés.
32. Zuluaga R. *El valor normativo de la Constitución de 1991*. Medellín: Ed. Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.